

UCR TEC

UNA



UNED

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Consejo Nacional de Rectores

Oficina de Planificación de la Educación Superior

División de Planificación Interuniversitaria

Narrativas de escenarios de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica al 2050

En el marco de la formulación del PLANES 2026-2030

PLANES

2026-2030



2050

Plan Nacional de la Educación Superior

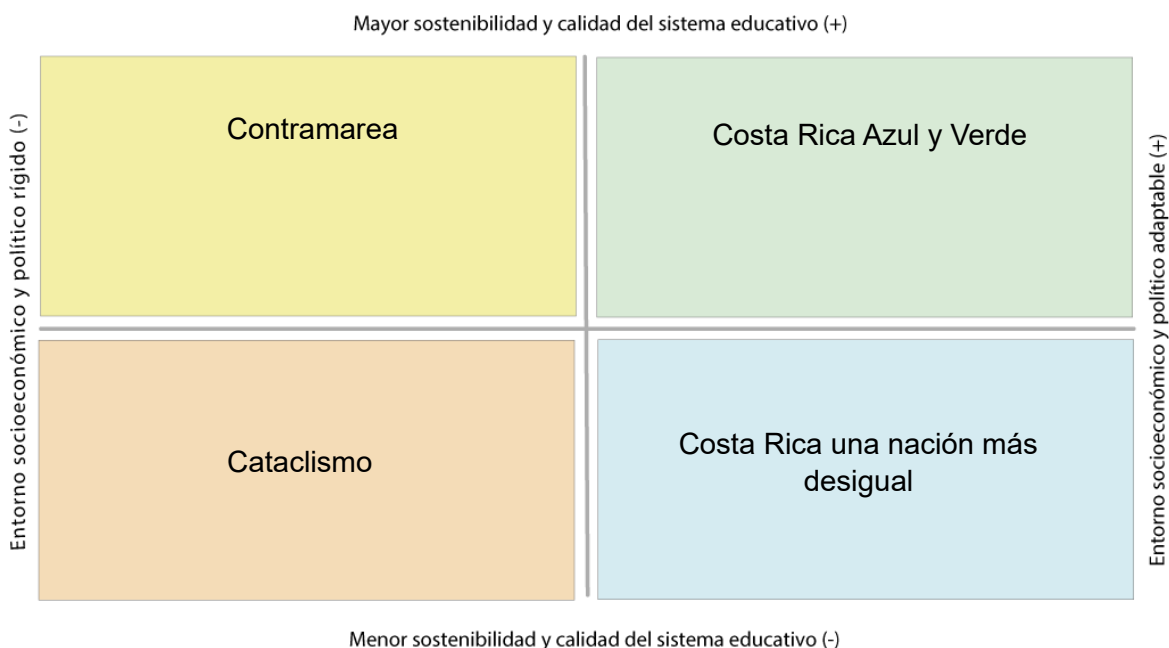
Narrativas de escenarios de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica al 2050

Explicación de los ejes de los escenarios

La construcción de los escenarios de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica surge a partir de una serie de talleres realizados en junio de 2024 con personas representantes de las comisiones interuniversitarias, designadas por diferentes autoridades y los programas del Conare; y será uno de los insumos para la formulación del PLANES 2026-2030. Este proceso forma parte de la metodología de planificación por escenarios de *Oxford Scenario Planning Approach (OSPA)*, que utiliza un enfoque centrado en la gestión de la incertidumbre a través de la construcción de escenarios narrativos.

En este sentido, la definición de los ejes de los escenarios seleccionados se da a partir de un ejercicio participativo en una dinámica de grupos, realizada en los talleres mencionados anteriormente, con el fin de lograr un consenso sobre las ideas clave para cada escenario. La matriz de escenarios se articuló alrededor de los ejes de "Mayor sostenibilidad y calidad del sistema educativo" y "Menor sostenibilidad y calidad del sistema educativo" en el eje de la X, mientras que en el eje Y se situaron "Entorno socioeconómico y político rígido" y "Entorno socioeconómico y político adaptable", los cuales se presentan en la imagen 1.

Imagen 1. Matriz con las variables de escenarios



Fuente: Talleres de construcción de propuestas de escenarios de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica al año 2050, junio 2024.

Los ejes se definieron de la siguiente manera:

Eje X: Sostenibilidad y calidad del sistema educativo

Mayor sostenibilidad y calidad del sistema educativo: este eje representa un sistema educativo que es sostenible en el tiempo y que eleva su calidad, abarcando tanto la educación básica y media como la educación superior. Aquí, las instituciones educativas cuentan con recursos para operar de manera eficiente. La educación básica y media prepara a la población estudiantil de manera excelente, asegurando que cuenten con aprendizajes y competencias diversas a la educación superior. Los programas académicos están actualizados, los métodos de enseñanza son innovadores, y existe una fuerte conexión con las necesidades del mercado laboral y la sociedad. La población estudiantil recibe una formación integral que les permite destacarse tanto a nivel nacional como internacional.

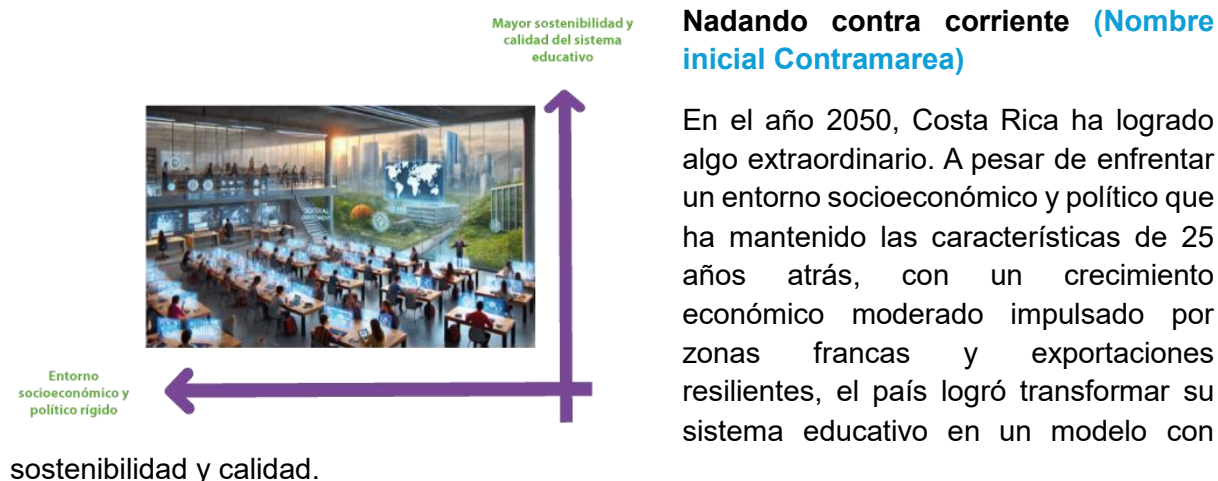
Menor sostenibilidad y calidad del sistema educativo: en este extremo, el sistema educativo tiene una frágil sostenibilidad y la enseñanza y aprendizajes son de baja calidad, afectando tanto a la educación primaria y secundaria como a la educación terciaria. Las instituciones enfrentan problemas de financiamiento y operan con ineficiencia. La educación básica y media no prepara adecuadamente a la población estudiantil, lo que repercute negativamente en su oportunidad de ingreso y desempeño en la educación superior. Los programas académicos no son actualizados, los métodos de enseñanza son tradicionales, y existe una desconexión con las necesidades del mercado laboral y la sociedad, lo cual repercute en una población estudiantil con formación limitada que afecta su oportunidad de ingreso y desempeño en la educación superior hasta su nivel de competitividad en ámbitos nacionales e internacionales.

Eje Y: Entorno socioeconómico y político

Entorno socioeconómico y político adaptable: representa un entorno que se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías y a un mercado laboral en constante cambio. En este escenario, hay un alto grado de innovación, flexibilidad y dinamismo en las políticas económicas y sociales. Las instituciones, tanto públicas como privadas, son ágiles y responden eficazmente a las demandas de un entorno globalizado y tecnológico.

Entorno socioeconómico y político rígido: en este eje, el entorno no experimenta cambios acelerados. Las políticas económicas y sociales apenas mantienen un ritmo de cambio incremental. Las instituciones, tanto públicas como privadas, no realizan cambios innovadores, son menos ágiles en las respuestas ante los cambios en los entornos y tienen dificultades para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a las demandas emergentes y transformadoras del mercado laboral.

Así, se combinan estos dos ejes para desarrollar cuatro escenarios, que se describen a continuación.



Esta es la historia de cómo Costa Rica, enfrentando desafíos persistentes y un contexto de cambios lentos, logró ofrecer una educación de excelencia a todas sus generaciones. Esto fue posible gracias a ajustes en las políticas públicas educativas, que apostaron por un modelo de desarrollo basado en un contrato social donde el conocimiento permeó tanto a nivel nacional como regional.

El camino no fue fácil. Al 2030, el país continuó lidiando con un crecimiento económico que, aunque sostenido, era modesto y mantenía una fuerte brecha entre producción y empleo, profundizando las desigualdades laborales, sociales y territoriales. A pesar de ello, las universidades públicas hicieron valer su autonomía y credibilidad a través de un uso eficiente de recursos, la rendición de cuentas, su orientación humanista y un decidido compromiso con el medio ambiente.

Debido al contexto de inestabilidad socioeconómica y política que no favorecía la inversión en la educación superior pública, sus autoridades, de común acuerdo con sus comunidades, tomaron la enérgica decisión de realizar una revisión de su modelo de gobernanza, así como el accionar de sus ejes sustantivos (investigación, docencia, extensión y acción social). Los cambios resultaron en la consolidación de un sistema universitario articulado con una presencia pertinente a las condiciones locales en todo el territorio nacional, lo que potenció la autonomía universitaria para generar respuestas efectivas ante un entorno adverso. Este nuevo enfoque permitió a las universidades priorizar los recursos hacia su razón de ser.

Con el nuevo modelo de gobernanza implementado por las universidades públicas, se adoptaron estrategias de contención del gasto, junto con acciones innovadoras para atraer y fortalecer fuentes alternativas de ingresos. Además, se introdujo un mecanismo de incentivos para la formación continua de su persona, con el objetivo de atraerlo, formarlo y retenerlo al personal docente.

Por otra parte, comenzaron a verse los resultados de un ambicioso plan de nivelación diseñado para abordar la crisis de aprendizaje en los niveles previos a la universidad, un problema que amenazaba con socavar el desarrollo del país. Este plan sentó las bases para una transformación sostenida del sistema educativo público.

Aunque el respaldo socioeconómico era limitado, las instituciones implementaron acciones para abordar temas sociales clave, como la reducción de la pobreza, la mejora en la recaudación fiscal en beneficio de los sectores vulnerables, la disminución de las brechas de

género y otras desigualdades, el fomento de la inclusividad y la atención de los problemas relacionados a la salud mental. A esto se sumó el envejecimiento de la población, resultado del agotamiento del bono demográfico, lo que añadió nuevas capas de complejidad a la inestabilidad social.

Para 2035, la contención en la inversión social seguía siendo un obstáculo, limitando la expansión de recursos en áreas cruciales como la educación, la salud, el sistema de pensiones, la seguridad ciudadana, la vivienda, el abastecimiento de agua, la ciencia y tecnología, la infraestructura vial y portuaria, el medio ambiente y la cultura. Los desafíos ambientales persistieron, con retrocesos en la gestión climática y un desordenado ordenamiento territorial. A esto se sumó una creciente gentrificación, que desplazaba a las poblaciones locales por grupos con mayor poder adquisitivo, agravando aún más la situación existente.

En respuesta, se implementaron cambios significativos en los modelos pedagógicos, lo que permitió ampliar la capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad y los sectores productivos. Esto facilitó la atención a las demandas de empleo en las distintas regiones del país mediante una oferta de formación especializada, integrando la educación terciaria con las necesidades de innovación del sector empleador. De este modo, el sistema educativo costarricense comenzó a transformarse desde su interior, a pesar de las grandes limitaciones económicas, promoviendo una mayor articulación entre los actores clave del sistema y fomentando una colaboración efectiva entre todos los niveles educativos, algo que antes parecía un ideal lejano.

En 2040, uno de los hitos más importantes fue la ampliación de la cobertura educativa, garantizando acceso universal y gratuito a la educación pública desde la primera infancia en todas las regiones del país. Esto aseguró que cada estudiante recibiera el currículo completo, independientemente del centro educativo. Al mismo tiempo, se avanzó en la focalización de recursos para becas e incentivos destinados a las poblaciones más vulnerables, garantizando que nadie quedara rezagado. Estos esfuerzos contribuyeron a la continuidad de las políticas nacionales para combatir la criminalidad, los narco-territorios, la violencia y el lavado de dinero, entre otros problemas.

Para el año 2045, la oferta académica de las universidades públicas, adaptada al envejecimiento de la población, se consolidó con opciones formativas innovadoras y articuladas a lo largo de toda la vida. Su objetivo era atender de manera pertinente las necesidades de diversas poblaciones en todas las regiones del país, optimizando el uso de los recursos disponibles y fortaleciendo el acompañamiento comunitario a través de la gestación y continuidad de proyectos de extensión y acción social.

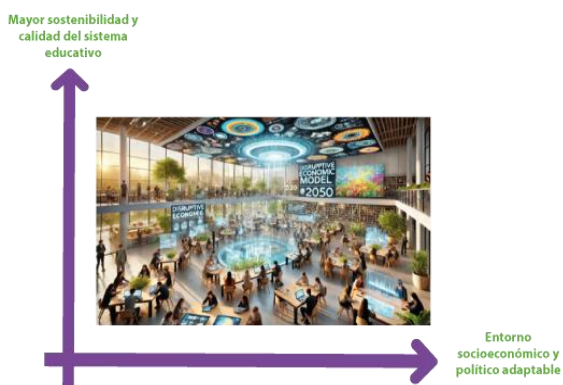
La internacionalización del sistema educativo en su conjunto se expandió significativamente, llevando a Costa Rica a un nuevo nivel de colaboración y competitividad global. Los avances tecnológicos se aprovecharon no solo para el análisis de información, sino también para aportar soluciones innovadoras a necesidades estratégicas tanto nacionales como internacionales.

Al llegar al año 2050, Costa Rica consolidó un sistema nacional de evaluación educativa estandarizada, independiente y técnicamente robusto, que comenzó a proporcionar datos confiables para mejorar el diseño de las políticas educativas. El conocimiento no solo se convirtió en un derecho garantizado, sino también en un pilar de

la identidad nacional, reconocido y valorado por la comunidad internacional. A pesar de los constantes desafíos socioeconómicos y políticos, así como de las dificultades ambientales y demográficas, el país logró construir un sistema educativo resiliente, sostenible y de alta calidad, percibido por la población como un motor de movilidad social.

Esta es la historia de un país que, a pesar de enfrentar numerosos obstáculos, encontró la manera de superar sus debilidades y limitaciones, sentando las bases para un futuro más prometedor.

Costa Rica azul y verde



En el año 2050, una nueva visión de país, centrada en el desarrollo humano, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental, con indicadores comparables a los de una zona azul¹, se había consolidado. La integración de la inteligencia artificial facilitó la creación de sistemas de información interconectados, optimizando tanto la planificación como la gobernanza institucional.

Esta es la historia de cómo Costa Rica alcanzó estos estándares. Para el 2030, Costa Rica logró forjar una alianza entre el sector público y privado, liderada por las universidades y otros sectores clave, lo que favoreció la sostenibilidad económica y educativa a nivel nacional, y sentó las bases para un nuevo contrato social. Las universidades públicas reafirmaron su papel como pilar de la democracia costarricense.

El sistema educativo impulsó y se benefició de estos cambios. La participación ciudadana en educación mejoró su gestión, se fortalecieron los programas de actualización y permanencia docente y se integraron tecnologías digitales en el aprendizaje.

Adicionalmente, las universidades públicas llevaron a cabo programas de transformación digital contribuyendo a reducir la brecha tecnológica en todos los territorios del país. Asimismo, éstas implementaron cambios en los modelos de gobernanza, lo que resultó en una mayor eficiencia institucional y una mejora en la percepción de los usuarios. Esto permitió fortalecer las alianzas con los sectores público, privado y demás actores sociales.

Para 2035, una lucha sostenida contra la evasión fiscal permitió un incremento significativo en la recaudación de impuestos, mientras que profundas reformas en la gestión pública mejoraron la calidad y cobertura de los servicios esenciales. Además, se implementó una reforma para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la seguridad social, a través de estrategias con el sector productivo y el trabajo conjunto entre las diversas instituciones involucradas. Este enfoque permitió a Costa Rica enfrentar los desafíos demográficos de manera proactiva.

El país fortaleció su política ambiental, alineándola con estándares internacionales, y logrando una mayor atracción turística con enfoque sostenible a nivel mundial, lo que impulsó el aumento de las inversiones y la creación de empleo para el desarrollo local, sin detrimento para las zonas protegidas.

Por otra parte, el sistema educativo público consolidó metodologías de enseñanza-aprendizaje participativas e innovadoras, transformando el rol tradicional de docentes y

¹Estas zonas se tiñen de azul de manera coincidente cuando sus pobladores de ochenta, noventa o cien años gozan de los siguientes factores que fortalecen su condición: buena salud física y mental, el apego a una tradición alimentaria, una sólida fe y espiritualidad, mucho apoyo y respeto de una red familiar, la actividad física reflejada en una movilidad constante y contar con un propósito de vida o razón de ser.

estudiantes. Además, las universidades públicas lograron hacer cumplir el mandato constitucional de negociaciones quinquenales con el gobierno, optimizando el uso de los recursos asignados al FEES, y complementaron esto con una diversificación de sus fuentes de ingresos

Para 2040, se observan los resultados de las reformas en la calidad educativa de las universidades públicas, con una transformación flexible e innovadora de su oferta académica, ofreciendo diversas alternativas de formación alineadas con las demandas sociales y las necesidades específicas del sector empleador. Los programas de estudio en diferentes modalidades de enseñanza (virtual, presencial, a distancia, autodirigida, entre otras) intensifican un currículo humanista alineado con la promoción de la salud mental. Además, se prioriza el desarrollo de competencias pertinentes, con opciones de formación a lo largo de la vida y una oferta diversa de titulaciones y certificaciones, según las necesidades de la población, con especial énfasis en las zonas regionales.

Costa Rica disfrutaba de una bonanza económica y política, lo que permitió el desarrollo de megaproyectos de infraestructura en el sistema vial. Políticas efectivas promovieron un desarrollo productivo equilibrado en todas las regiones del país, aumentando el poder adquisitivo de las poblaciones rurales. De esta manera, se estableció un contrato político inclusivo que sentó las bases para un largo período de consenso y eficiencia en la definición e implementación de políticas públicas.

Para 2045, el país elevó sus estándares de eficiencia en la gestión portuaria e incorporó el uso de nuevas fuentes de energía, fortaleciendo su competitividad para atraer inversión extranjera. Además, Costa Rica logró aumentar la esperanza de vida, alcanzando una posición privilegiada en el índice de progreso económico y social, acercándose a los indicadores de una "zona azul". El sistema educativo público en todos sus niveles experimentó una transformación digital en los centros educativos, ofreciendo programas de estudio accesibles e inclusivos para diversas poblaciones.

Para 2050, el entorno socioeconómico y político garantizó la sostenibilidad de un sistema educativo público interconectado, integrando tecnologías emergentes con principios éticos que aseguraron la continuidad en la expansión del conocimiento. Se optimizó la planificación y la gobernanza institucional, lo que mejoró la percepción positiva de los servicios brindados.

Costa Rica logró una transición óptima hacia energías verdes y renovables, asegurando la sostenibilidad de los recursos hídricos y liderando el tratamiento de diversos tipos de desechos. Esto consolidó al país como una nación azul y verde, un ejemplo de armonía entre desarrollo humano, económico y respeto por el medio ambiente, con un robusto contrato social reconocido a nivel internacional.

Entorno socioeconómico y político rígido



Menor sostenibilidad y calidad del sistema educativo

El Cataclismo

En el año 2050, Costa Rica enfrenta un colapso institucional debido a la visión radical de liderazgos que impulsaron la mercantilización y comercialización de sus reservas biológicas y marinas, junto con el debilitamiento del respeto por Constitución Política, sus leyes y, en particular, la autonomía universitaria. Predomina una visión que transforma la economía hacia un modelo extractivista.

Esta es la historia de cómo Costa Rica comenzó a desmoronarse bajo decisiones que erosionaron su estabilidad institucional. Para 2030, el entorno socioeconómico y político es estable pero rígido. Como resultado, se modificaron leyes y normas que redujeron los incentivos laborales asociados a competencias, eliminando cualquier sistema de méritos en la fuerza laboral del sector público y precarizando la calidad de los servicios brindados. Además, la productividad disminuyó y el costo de vida aumentó, exacerbando las desigualdades y fomentando la informalidad laboral.

Por otra parte, el sistema educativo, tradicionalmente un pilar de la sociedad costarricense ha sido drásticamente deteriorado, con una calidad y sostenibilidad mucho menores, afectado por un marcado rezago educativo desde los niveles iniciales. Como consecuencia, el crimen organizado ha escalado, y los niveles de corrupción han dado lugar a alianzas con el gobierno, lo que ha incrementado la drogadicción, violencia e inseguridad ciudadana, afectando, más gravemente, a las regiones.

Para 2035, la educación pública ha sido prácticamente desmantelada, lo que ha impedido el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para fomentar aprendizajes sustantivos, pensamiento crítico, conciencia medioambiental y cultura digital. En este nuevo modelo, no se aplican estándares de calidad ni se norman perfiles de egreso, lo que generó una desconexión con las necesidades de la sociedad y el mercado laboral.

La falta de inversión en educación también afectó la actualización de la malla curricular en las universidades públicas, resultando en una oferta educativa desfasada y poco pertinente. Esto erosionó su calidad y credibilidad, impidiendo la consolidación de un sistema universitario público. A pesar de los esfuerzos de las universidades por mantener el contrato social, la población carecía de las herramientas necesarias para enfrentar las crecientes demandas de un mercado laboral, tanto local como internacional, cada vez más especializado y exigente.

Para 2040, la tasa de desempleo a nivel nacional aumentó significativamente, mientras que la seguridad social y los sistemas de pensiones se debilitaron. Las necesidades de las poblaciones vulnerables no fueron atendidas, y la infraestructura vial colapsó. Además, no se tomaron medidas para mitigar las repercusiones del bono demográfico: la población infantil se vio obligada a trabajar y disminuyó la conciencia ambiental.

Las oportunidades de acceder a una educación formal se redujeron debido a la baja cobertura del sistema educativo, la inequidad en el acceso y la precaria inversión estatal. Esto eliminó las opciones de becas para las poblaciones de escasos recursos, favoreciendo la privatización de la educación en todos sus niveles.

En este contexto, las poblaciones excluidas del sistema educativo público y del mercado laboral luchaban por encontrar empleo en una economía que ahora demandaba menos trabajadores, pero con perfiles altamente especializados y técnicos, influenciados por las tendencias internacionales.

Para 2045, la privatización de los servicios públicos ha desencadenado una crisis sanitaria y alimentaria sin precedentes. La brecha entre quienes pueden acceder a una educación privada de calidad y aquellos que no tienen esa posibilidad se ha ampliado drásticamente, mientras que las disparidades de género han resurgido y se han profundizado aún más.

En el ámbito ambiental, el país enfrenta una catástrofe. La flora y fauna se encuentran en camino hacia una extinción progresiva, los recursos naturales se explotan sin control, y las áreas protegidas han sido comercializadas. Además, se experimentan fenómenos climáticos extremos como sequías, inundaciones y un aumento en la contaminación de los océanos. Sin una fuerza laboral capacitada para enfrentar estas crisis y en medio de un contexto de corrupción tanto local como internacional que la propicia, las comunidades costeras y montañosas se han visto obligadas a desplazarse hacia otros territorios del país, generando un profundo desarraigo cultural.

Para 2050, en medio de este panorama, el sistema educativo público llegó a su máximo debilitamiento. Se han implementado programas de capacitación básica complementaria, diseñados únicamente para sostener un sistema socioeconómico en declive, en lugar de promover una educación integral y de calidad. La sociedad, ya desilusionada con una institucionalidad incapaz de responder a sus necesidades, ha comenzado a fomentar una actitud de protesta y descontento. El contrato social, que alguna vez fue un pilar fuerte y unificador, se ha fracturado, dejando a Costa Rica en una encrucijada de incertidumbre e incredulidad.



Costa Rica: una nación más desigual (nombre inicial Costa Rica un Mercedes Benz con combustible pero atorado)

En el año 2050, Costa Rica se encuentra en un periodo de profundas contradicciones. Aunque el país ha logrado sostener su economía, este éxito ha tenido un costo elevado en términos educativos, sociales y ambientales. Las

políticas públicas y las decisiones del sector privado han creado un entorno socioeconómico y político adaptable, pero han debilitado la cohesión social, dejando al país con serias fracturas en su tejido social y ambiental.

Esta es la historia de cómo Costa Rica llegó a esta realidad, en la que el progreso económico no ha sido suficiente para evitar el deterioro de su sistema educativo, la crisis social y la degradación ambiental. Para 2030, se observaba una tendencia hacia cambios rápidos y desestabilizadores en la estructura y funcionamiento de la sociedad, que impulsaron una serie de decisiones políticas y económicas dirigidas hacia la privatización de servicios, a expensas de la inversión social y la sostenibilidad ambiental. Además, la politización de decisiones en temas trascendentales, como la asignación de financiamiento para la educación pública en todos sus niveles, dificultó la atención al creciente rezago educativo. El sistema universitario público no logró consolidarse, lo que limitó la formulación e implementación de respuestas oportunas, innovadoras y articuladas

Para 2035, el debilitamiento de la inversión pública en educación ha desestabilizado el sistema educativo nacional y ha seguido deteriorando su calidad. Esto ha limitado el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física y tecnológica, afectado la retención del talento académico, y provocado el estancamiento de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica.

La desigualdad y la vulnerabilidad social, agravadas por la insuficiente inversión en servicios públicos y una corrupción rampante, han alcanzado niveles sin precedentes. Como resultado, ha aumentado la pobreza, la violencia y la inseguridad ciudadana, lo que ha suscitado una respuesta del soberano ciudadana impulsiva en forma de protestas y resistencia al accionar del gobierno, exigiendo mayor atención a los problemas sociales. Además, las instituciones públicas, incluidas las universidades, no lograron articular una respuesta oportuna y efectiva ante la crisis.

Para 2040, una crisis nacional ha estallado, el progreso económico no logró traducirse en mejoras significativas en el desarrollo humano y ambiental. El debilitamiento severo del presupuesto destinado a la educación terciaria fracturó su estructura y funcionamiento.

La fuga de talento profesional se consolidó como un fenómeno alarmante, obligando a muchas personas a buscar mejores oportunidades laborales en el extranjero. Al mismo tiempo, el debilitamiento de la autonomía universitaria se ha agravado, restringiendo la capacidad de acción de las universidades públicas y limitando su contribución al desarrollo nacional. Esto impactó negativamente los programas de extensión y acción social, reduciendo su apoyo a las poblaciones más vulnerables en todas las regiones del país.

Para 2045, el narcotráfico encontró un terreno fértil en medio de este caos, exacerbando aún más la inestabilidad y la inseguridad social. El deterioro ambiental empeoró, con problemas graves como la inseguridad alimentaria y la degradación de los recursos naturales, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. A pesar de los esfuerzos de las universidades públicas por implementar acciones de mejora, estas no lograron responder adecuadamente a la crisis política y social, socavando aún más su rol como generadoras de conocimiento y promotoras de movilidad social en el país.

Para 2050, en este contexto, el sistema educativo costarricense, que alguna vez fue un modelo en América Latina, ha quedado gravemente rezagado. Las oportunidades para alcanzar niveles educativos que respondan a las demandas sociales y productivas son escasas, lo que ha llevado a una mayor precarización de la fuerza laboral nacional y un aumento de la economía informal. Además, los intereses del sector privado han influido en las decisiones de la política educativa, resultando en una desconexión entre el sistema educativo público, las necesidades tecnológicas y las demandas del sector productivo, exacerbando las desigualdades, con un impacto aún mayor en las regiones del país.